

Paran Diarios Argentinos

Protesta Contra el Terrorismo

Por Pablo Guisanni

(La Opinión, Buenos Aires)

El Ejército ratificó su actitud y se insinúa una crisis en el peronismo. El problema suscitado con el periodismo eclipsó, en la última semana, otros relevantes acontecimientos políticos.

EL asesinato de un redactor del diario La Opinión, coincidente con una campaña televisiva contra éste y otro matutino, desató esta semana una de las más efectivas huelgas de periodistas que se recuerden en Argentina. Ambos hechos —el crimen y la respuesta— marcaron el tono de los últimos dos semanas y dejaron de manifiesto una creciente tendencia a enfrentar con respuestas colectivas la escalada terrorista que padece el país.

Esta renovada presencia del terror en el panorama argentino casi eclipsó durante una semana otros acontecimientos de especial significación, como la reestructuración de los mandos del Ejército y el principio de crisis surgido en la conducción del justicialismo.

Un cadáver acribillado a balazos y con aparentes huellas de torturas fue encontrado al caer la noche del domingo 18 de mayo entre los altos pastizales que rodean las piscinas de Ezeiza, escenario de otros hallazgos similares durante los últimos meses. Conducido a la morgue del hospital local, el cuerpo fue identificado el lunes como el de Jorge Money, de 29 años, redactor acreditado por La Opinión ante el Ministerio de Economía. Había sido visto por última vez el jueves 15 al abandonar la casa de sus padres, luego de almorzar allí como todos los días para dirigirse a su lugar de trabajo.

Money pasó a engrosar así una tétrica lista de más de 450 asesinatos perpetrados por el terrorismo de ambos signos desde el 1.º de julio de 1974, según una estadística publicada por el matutino The Buenos Aires Herald.

Su muerte se produjo mientras comenzaba a propalarse por los canales de televisión un aviso oficial que insinuaba la existencia de propósitos disolventes tras el manejo de la información en los diarios La Opinión y el Cronista Comercial.

CONMOCIONO LA COINCIDENCIA

LA coincidencia entre el crimen y la amenaza que parecía emanar del corto publicitario para dos importantes fuentes de trabajo tuvo efectos de conmoción sobre el gremio periodístico, que en los días

subsiguientes habría de verse agitado además por amenazas de muerte formuladas contra Enrique Alonso, también de La Opinión, la directora y un secretario de redacción de la revista La Familia Cristiana, y el redactor Juan N. Gaudenzi, del matutino Clarín. En el caso de este último hubo también un intento de llevar la amenaza a la práctica. El personal de La Opinión declaró un paro de 24 horas que fue solidariamente acompañado por periodistas y fotógrafos de otros medios, en una movilización que paralizó a casi toda la prensa de la capital federal el martes 21 y parte de los diarios de esta ciudad y del interior al día siguiente.

Esta reacción siguió a otras muestras recientes de respuesta colectiva al terror. Los actores efectuaron un paro de 24 horas a principios de mayo ante amenazas de muerte formuladas contra varios de ellos por una organización de extrema derecha. Amenazas similares recibidas por algunos facultativos había desencadenado poco antes un paro médico en la provincia de Buenos Aires.

Ya se habían registrado en el país paros gremiales en reacción al terrorismo de extrema izquierda, como en los casos de Dirck Henry Kloosterman, el dirigente mecánico asesinado en 1973, y de Hipólito Acuña, el diputado nacional y dirigente metalúrgico santafesino ultimado por un comando terrorista a principios de 1975. Ahora se comenzaba a responder de igual manera al terrorismo de signo opuesto.

Hay, con todo, algún matiz de diferencia entre uno y otro tipo de movilización colectiva. Las huelgas originadas por los asesinatos de Kloosterman y Acuña eran naturales reacciones de protesta, indignación y repudio, pero no necesariamente movimientos de presión. Nadie consideró jamás necesario ejercer presión para que el terrorismo de ultraizquierda fuera investigado, perseguido y reprimido por las fuerzas de seguridad, que a lo largo de los últimos tiempos obtuvieron notorios éxitos en este orden. Pero el panorama no es tan claro en el otro extremo.

Un jurista europeo de paso por Buenos Aires expresó recientemente a colegas locales su preocupación ante informes llegados al exterior sobre el auge terrorista en Argentina, y requirió alguna aclaración acerca del concepto de "violencia protegida" utilizada por el líder radical Ricardo Balbín en aparente alusión al extremismo de derecha.

"¿Significa esto, por ejemplo, que los presos de extrema derecha reciben mejor trato que los de extrema izquierda?", preguntó.

Sería superfluo consignar la respuesta y la consiguiente perplejidad del visitante, ilustrativas ambas de la razón por la cual los recientes paros de médicos, actores y periodistas fueron, además de expresiones de repudio, actos de presión: no hay presos de extrema derecha.

LOS PERIODISTAS PUEDEN PRESIONAR

LOS sucesos de la semana demostraron además la magnitud de la presión que es capaz de desarrollar el gremio periodístico por la naturaleza misma de sus funciones. Diseminados por todos los ámbitos del Estado y de la vida pública del país, los periodistas son por oficio investigadores y testigos diarios de lo que ocurre en los centros vitales de la nación. En sus manos está la evaluación e interpretación de los hechos y el manejo de la información, lo que convierte a su amistad en un objetivo buscado y cultivado por políticos, legisladores, funcionarios, hombres públicos de todos los niveles y sectores. La madre de un metalúrgico asesinado no tiene acceso fácil al Congreso; el periodista, en cambio, vive allí, dialoga cotidianamente con diputados y senadores y hasta se tutea con algunos de ellos.

Todo esto sería un irritante privilegio si no fuera asumido como una excepcional responsabilidad, y esta fue una semana de prueba en tal sentido. Los legisladores de la oposición han visto naufragar veintenas de pedidos de interpelación a lo largo de los últimos dos años, pero el periodismo logró precipitar el viernes último la presencia del ministro del Interior en el Congreso para informar sobre la violencia en, por lo menos, una variante informal de interpelación.

El asesinato y las amenazas que golpearon durante la semana al periodismo argentino, por otra parte, generaron una oleada de reacciones que cubrió todo el espectro político del país, desde el oficialismo hasta la más enconada oposición, excediendo todo lo visto hasta ahora frente a hechos de esta naturaleza. ¿Se debió a que el terror se ensañó esta vez con la prensa y al manejo que por tal motivo hizo el periodismo de la información? Sería desagradable que así fuera, y el tema merece alguna reflexión íntima por parte de los periodistas argentinos.

Pero quizás haya otra explicación, escuchada con frecuencia durante la semana en diversos medios: el cuerpo social argentino ha llegado al punto de saturación en su capacidad de seguir absorbiendo violencia. Se comprendería así por qué, más allá del terror y su trasfondo de odio y ensañamiento, los últimos días dejaron una imagen de desusada homogeneidad nacional en la condena del crimen, que unificó a las expresiones legislativas del oficialismo con toda la gama opositora.

"A estos actos de barbarie no podemos responder con el silencio. Lo condeno con toda indignación. Los peronistas, que conocemos la violencia en carne propia, rechazamos tanto al terrorismo de una extrema como de la otra", declaró el martes último el presidente del bloque oficialista del Senado, doctor José Humberto Martiarena.

RESTRUCTURACION EN EL EJERCITO

ENTRETANTO, el proceso militar abierto la semana anterior con el remplazo del teniente general Leandro E. Anaya por el general Alberto N. Laplane en el comando general del Ejército, culminó en estos días con una restructuración en los mandos del arma.

Con los generales Alberto S. Cáceres, Roberto Viola, Carlos Delia La Rocca y Carlos Suárez Mason al frente de los cuerpos I, II, III y V del Ejército, respectivamente, el nuevo cuadro de los mandos denota en general un criterio profesionalista en la conducción y un propósito consiguiente de mantener dentro de los carriles normales la movilidad interna del arma.

Sólo la designación del general Cáceres en vez del general Jorge Videla como titular del cuerpo I fue visto en algunos medios como un matiz de imprevisibilidad en el proceso pero aun en este caso queda aparentemente intacta la imagen profesionalista con que viene perfilándose el nuevo comandante general. La información trascendida, en efecto, atribuye al Poder Ejecutivo, y no al general Laplane, la iniciativa en el cambio de figuras.

De este modo los acontecimientos militares de la semana tendieron a disipar versiones originarias que caracterizaban la promoción de Laplane al comando general del Ejército como el triunfo de una facción castrense presuntamente asociada con sectores del gobierno.

Fuentes fidedignas, por otra parte, afirman que militares allegados al radicalismo tomaron contacto en estos días con figuras de ese partido para señalarles que eran infundadas las muestras de suspicacia con que el doctor Balbín recibió inicialmente el relevo de Anaya.

El respaldo a las instituciones y la determinación de llevar a fondo la lucha antisubversiva fueron reiteradas por Laplane —al finalizar la semana—, como línea invariable del Ejército, en un mensaje conmemorativo del 25 de mayo enviado a todos los comandos del arma, subrayando así una vez más la idea de continuidad en la línea de acción heredada del teniente general Anaya.

Si la semana ofreció imágenes de cohesión en el ámbito militar, un panorama algo distinto fue surgiendo en el seno del oficialismo, donde algunas renunciadas en los altos niveles partidarios presentaron los primeros síntomas de una crisis.

Ya en la semana anterior habían trascendido las dimisiones de Jorge Manuel Camus y Guillermo Hermida a las secretarías general y de adoctrinamiento del Consejo Nacional justicialista.

Según fuentes cercanas al Partido Justicialista, la dimisión de Camus respondería fundamentalmente a una actitud de disconformidad ante dos factores que, a su juicio, constituirían una amenaza a la vigencia del movimiento mayoritario:

La extrema lentitud del proceso de reorganización del partido, tras la virtual congelación de la vida interna, como consecuencia del enfrentamiento entre la ortodoxia y la denominada Tendencia Revolucionaria.

El decreciente peso del partido en la elaboración de las decisiones que adopta el gobierno, lo que podría generar una peligrosa bifurcación entre la estrategia oficial y la del movimiento que debe sustentarlo.

Ambos factores, según apreciaciones atribuidas a Camus, estarían íntimamente correlacionados. La escasa gravitación del partido sobre el gobierno sería una natural consecuencia de su retracción y esclerosamiento como expresión política de sus bases.

Camus, en declaraciones formuladas en estos días, denunció una situación de "parálisis" en el seno del Partido Justicialista. Dijo que tal estado de cosas "hace el campo orégano a los interesados en la desintegración del Movimiento Nacional, para actuar en consecuencia sobre el pueblo peronista".

La situación planteada sugiere un choque intestino entre sectores que presionan en demanda de una pronta normalización de la vida partidaria y otros que se inclinarían por una marcha más cautelosa en tal sentido. La actitud de estos últimos reflejaría cierta supervivencia del temor a la infiltración, que constituyó la tónica de la vida partidaria en los momentos más críticos del enfrentamiento con la tendencia.